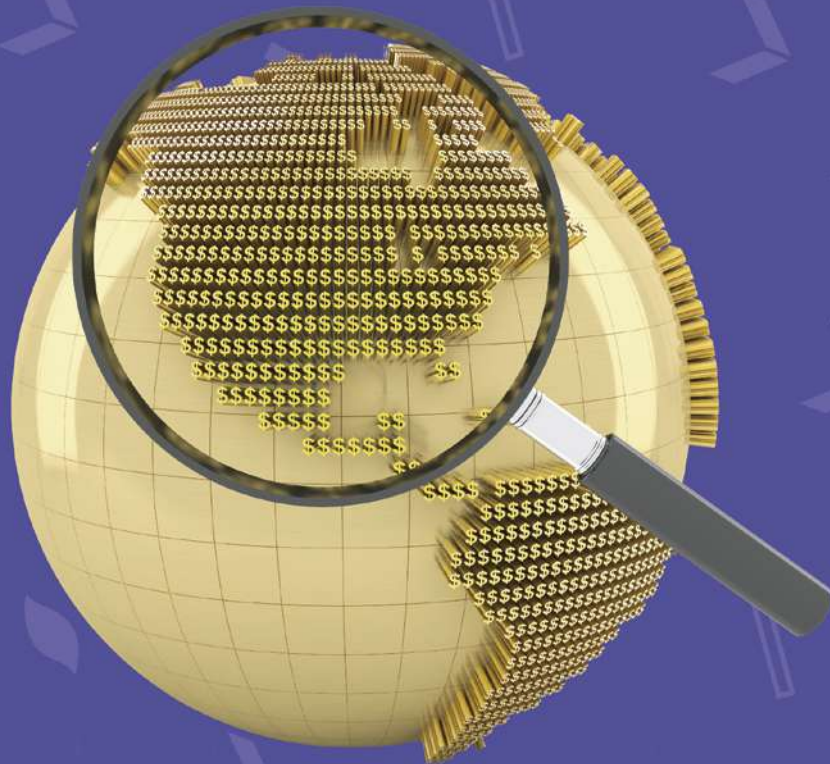


Las investigaciones *antidumping* PARTE I

Investigations on Antidumping
PART I



Dr. José Manuel Vargas Menchaca





Dr. José Manuel Vargas Menchaca

SEMBLANZA

Licenciado (1986), maestro (1989), doctor en Derecho (1992) y especialista en Finanzas Públicas (2013) de la UNAM. Fue Panelista del Capítulo XIX del TLCAN y ahora del Capítulo 10 del TMEC. Árbitro de la Corte Internacional de Londres. Prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la SCT y en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente, Consultor en materia de comercio exterior. Asesor de Tesis y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Anáhuac, Cety's Universidad, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas, Instituto Superior de Posgrado, Instituto GVA, Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) e Instituto Especializado para Ejecutivos (IEE). Miembro de la Barra Mexicana de Abogados (1988); del Colegio de Profesores en Comercio Exterior, UNAM (1996); del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (2000); Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2018-2021), vicepresidente de la Comisión Jurídica de Concamin (2016-2021). Coordinador por parte del sector privado de la mesa de solución de controversias del TMEC y otros tratados (2016-2021) y colaborador de la Revista TLC Magazine México. Presidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas.

RESUME

With a Bachelor's degree (1986), master's degree (1989), and doctorate in law (1992) and specialist in public finance (2013) from UNAM, he was a panelist for NAFTA Chapter XIX and an Arbitrator of the International Court of London. He served in Puertos Mexicanos (Mexican Ports), a decentralized body of the SCT and in the Unit of International Commercial Practices of the Secretariat of Economy. Currently, he is a consultant in foreign trade matters, as well as a thesis advisor and professor at the School of Law of UNAM, University of Anahuac, Cety's University, Technological Institute of Monterrey, University of the Americas, Graduate Institute, GVA Institute, University Center for Legal Studies (CUEJ) and Specialized Institute for Executives (IEE). He is a member of the Mexican Bar Association (1988); the Association of Professors of Foreign Trade, UNAM (1996); and the Mexican Bar Association (2000). He is President of the International Trade Commission of the Mexican Institute of Public Accountants (2018 - 2021), Vice President of the Legal Commission of Concamin (2016 - 2021). Coordinator for the private sector of the dispute resolution panel of the USMCA and other agreements (2016-2021) and contributor to TLC Magazine Mexico. President of the World Compliance Association.

RESUMEN

En este artículo, el autor explica la primera parte del procedimiento relacionado con las investigaciones *antidumping* o discriminación de precios, como es también identificado en la Ley de Comercio Exterior, qué autoridad interviene y los requisitos de procedencia para lograr éxito en su presentación.

SUMMARY

In this article, the author explains the first part of the procedure related to antidumping or price discrimination investigations, as it is also identified in the Foreign Trade Law, which authority is involved and the procedural requirements to succeed in its presentation.

El *dumping* en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es también identificado como discriminación de precios, esto es, cuando el precio de exportación de una mercancía es inferior al valor normal que tiene en su lugar de origen, es decir, en el lugar donde se fabrica la mercancía. Para determinar si existe *dumping*, la comparación de ambos precios debe hacerse de manera equitativa y a nivel *ex fabrica* (*ex works* EXW), para lo cual deben realizarse los ajustes correspondientes a ambos precios y que los mismos correspondan a ventas suficientes y representativas de operaciones comerciales normales.

El Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (AGAAC)¹ reconoce: para contrarrestar el *dumping* podrán imponerse derechos *antidumping*, en el caso de México, se denominan cuotas compensatorias. De la lectura del mencionado Artículo se observa: para la imposición de derechos es insuficiente demostrar la existencia del *dumping*, también es necesario evidenciar la existencia de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional, o alternativamente, la posibilidad de demostrar que se causa un retraso importante en la creación de una rama de producción nacional. En este sentido, si existe un vínculo o relación causal entre el *dumping* y el daño, en cualquiera de sus tipos, es razón suficiente para que la autoridad proceda a la imposición de cuotas compensatorias.²

En el entendido de que durante el procedimiento de investigación la autoridad permitió a las partes interesadas: productores nacionales, importadores, exportadores y, en su caso, gobierno de la parte exportadora, la participación, presentación de información, alegatos, pruebas y defensa oral de sus intereses y pretensiones. Donde, como resultado de todo ello, la autoridad investigadora determinó la existencia del trinomio arriba señalado y, existen las evidencias suficientes y necesarias en el expediente administrativo que se formó como resultado de la investigación, ya sea porque las aportaron las partes interesadas o la autoridad se allegó de ellas.³

Para la imposición de derechos es insuficiente demostrar la existencia del *dumping*, también es necesario evidenciar la existencia de daño o amenaza de daño a la rama de producción nacional, o alternativamente, la posibilidad de demostrar que se causa un retraso importante en la creación de una rama de producción nacional.



It is not enough to merely prove the existence of dumping for the imposition of duties, it is also necessary to prove the existence of any damage or damage risk to the national production branch, or alternatively, the possibility of proving that a significant delay in the creation of a national production branch is caused.

Dumping within the parameters of the World Trade Organization (WTO) is identified as price discrimination, that is, when the export price of a good is lower than its normal value at its place of origin, i.e., the place where the good is manufactured. In order to determine whether dumping exists, the comparison of both prices must be made on an equitable basis and at the *ex works* (EXW) level, for which the corresponding adjustments must be made to both prices and that they correspond to sufficient and representative sales of normal commercial operations.

Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)¹ provides that anti-dumping duties may be imposed to counteract dumping, in the case of Mexico, they are called countervailing duties. From the mentioned Article it is observed that it is not enough to merely prove the existence of dumping for the imposition of duties, it is also necessary to prove the existence of any damage or damage risk to the

national production branch, or alternatively, the possibility of proving that a significant delay in the creation of a national production branch is caused. In this sense, if there is a link or causal relationship between dumping and damage, in any of its types, it is enough reason for the authority to proceed to the imposition of countervailing duties.²

During the investigation procedure, the authority allowed the interested parties: domestic producers, importers, exporters and, as the case may be, the government of the exporting party to participate, present information, allegations, evidence and oral defense of their interests and claims. Where, as a result of all this, the investigating authority determined the existence of the trinomial mentioned above and, there is sufficient and necessary evidence in the administrative record that was formed as a result of the investigation, either because it was provided by the interested parties or the authority obtained it.³

Valga decir, la imposición de derechos *antidumping* o cuotas compensatorias sólo puede ser resultado de una investigación iniciada y realizada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, comúnmente conocido como Acuerdo *Antidumping*.⁴ El cual, entre otras disposiciones, comprende un artículo para la determinación de la existencia de *dumping* (art. 2); para la determinación de la existencia de daño (art. 3); para la definición de rama de producción nacional (art. 4); para los requisitos de la iniciación del procedimiento *antidumping* (art. 5); para la adopción de cuotas compensatorias provisionales (art. 7); para el establecimiento y percepción de los derechos *antidumping* (art. 9); y para los avisos públicos y el contenido de las determinaciones iniciales, preliminares y definitivas de las autoridades investigadoras con motivo del procedimiento de investigación.⁵

El Artículo VI, anteriormente mencionado, señala: para la comparación de precios, valor normal y precio de exportación, se deberán tomar en cuenta las condiciones de venta (por ejemplo, mayoreo, menudeo, pago de contado o a crédito, descuentos, entre otros), las de tributación y aquellas otras que influyan en la comparabilidad de los precios (por ejemplo, diferencias físicas entre los productos, etc.). Incluso el Artículo referido señala:

1. ... un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de un país importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es:
 - a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador; ...⁶

Para la comparación de precios, valor normal y precio de exportación, se deberán tomar en cuenta las condiciones de venta (por ejemplo, mayoreo, menudeo, pago de contado o a crédito, descuentos, entre otros), las de tributación y aquellas otras que influyan en la comparabilidad de los precios (por ejemplo, diferencias físicas entre los productos, etc.).



For the comparison of prices, normal value and export price, the conditions of sale (for example, wholesale, retail, cash or credit payment, discounts, among others), taxation and those others that influence the comparability of prices (for example, physical differences between the products, etc.)

In other words, the imposition of antidumping or countervailing duties can only be the result of an investigation initiated and conducted in accordance with the provisions of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, commonly known as the Antidumping Agreement.⁴ Among other provisions, it includes an article for the determination of the existence of dumping (art. 2); for the determination of the existence of damage (art. 3); for the definition of domestic industry (art. 4); for the requirements for the initiation of the antidumping proceeding (art. 5); for the adoption of provisional countervailing duties (art. 7); for the establishment and collection of antidumping duties (art. 9); and for the public notices and the content of the initial, preliminary and final determinations of the investigating authorities in the investigation proceeding.⁵

Article VI, previously mentioned, states: for the comparison of prices, normal value and export price, the conditions of sale (for example, wholesale, retail, cash or credit payment, discounts, among others), taxation and those others that influence the comparability of prices (for example, physical differences between the products, etc.) shall be taken into account. The aforementioned Article also states:

1. ... a product exported from one country to another should be considered as introduced into the market of an importing country at a price below its normal value, if its price is:
 - a) lower than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country; ...⁶

Con lo cual además toma relevancia la expresión producto similar, que en inglés es identificada como *like product*, la cual acepta dos categorías, una referida al producto idéntico destinado al consumo en el país exportador, o bien, un producto que, sin ser igual en todas sus características, es un producto similar que puede tener una composición semejante, cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiable. Al respecto, debe observarse que el artículo 2.6 del Acuerdo *Antidumping* no alude a funciones e intercambiabilidad, como podrá observarse a continuación:

2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("*like product*") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.⁷

En cambio, el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), en su artículo 37 fracción II, claramente complementa lo establecido en el AAD, al disponer:

Artículo 37. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

...

II. Mercancías similares, los productos que, aun cuando no sean iguales en todos los aspectos, tengan características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables con los que se compara.⁸

Además de la determinación que debe hacerse con respecto a la similitud de producto, otro tema relevante es la identificación de la rama de producción nacional, es decir, no podría iniciarse una investigación *antidumping*, sin la existencia de una industria nacional que pudiera resultar afectada por la importación de mercancías en condiciones de *dumping*. Es decir, si no existe la industria nacional, o ésta no fabrica la mercancía idéntica o similar a la importada, no habría a quién proteger con respecto a las importaciones realizadas en condiciones de discriminación de precios.



In this context, the expression like product takes relevance, which accepts two categories, one referring to the identical product destined for consumption in the exporting country, or a product that, without being the same in all its characteristics, is a like product that may have a similar composition, fulfill the same functions and be commercially interchangeable. In this regard, it should be noted that article 2.6 of the Antidumping Agreement does not refer to functions and interchangeability, as it can be observed as follows:

2.6 Throughout this Agreement, the term "like product" shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e., alike in all respects to the product under consideration, or, in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.⁷

On the other hand, the Regulations of the Foreign Trade Law (RLCE for its Spanish acronym), in its Article 37 section II, clearly complements the provisions of the ADA, by providing as follows:

Article 37. For the purposes of these Regulations, the following definitions shall apply:

...

II. Similar goods are goods which, although not alike in all respects, have similar characteristics and composition, enabling them to perform the same functions and to be commercially interchangeable with those being compared.⁸

In addition to the determination that must be made with respect to the likeness of the product, another relevant issue is the identification of the domestic industry, i.e., an antidumping investigation could not be initiated without the existence of a domestic industry that could be affected by the import of dumped goods. That is to say, if there is no domestic industry, or it does not manufacture the identical or similar merchandise to the imported one, there would be no one to protect with respect to the imports made under conditions of price discrimination.



Para efectos de la determinación de la existencia de la rama de producción nacional, algunos aspectos fundamentales son: i) que la industria fabrique la mercancía idéntica o similar a la importada; ii) el o los solicitantes de la investigación demuestren que su producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichas mercancías; y, en el supuesto de que algunos de los productores estén vinculados a los exportadores, importadores, o sean ellos mismos importadores de la mercancía investigada, la autoridad podrá referirse al resto de los productores sin que la vinculación o la importación *per se* de la mercancía investigada, sea suficiente para descartar al solicitante (art. 4.1 del AAD).

For purposes of determining the existence of the domestic industry, some fundamental aspects are: i) that the industry manufactures the identical or similar product to the imported goods; ii) the petitioner or petitioners of the investigation demonstrate that their joint production constitutes an important proportion of the total national production of such good; and, in the event that some of the producers are related to the exporters, importers, or are themselves importers of the investigated good, the authority may refer to the rest of the producers, without the relationship or the import *per se* of the investigated merchandise, being sufficient to rule out the petitioner (art. 4.1 of the ADA).

Adicionalmente, cuando la totalidad de los productores nacionales estén vinculados a los exportadores o importadores, o sean ellos mismos importadores, la rama de producción nacional podrá referirse al conjunto de fabricantes de la mercancía producida en la etapa inmediata anterior de la misma línea continua de producción (art. 40 de la Ley de Comercio Exterior -LCE-).⁹

Inclusive, la legislación de la materia permite que los solicitantes de la investigación *antidumping* puedan únicamente representar al menos al 25% de la producción nacional de la mercancía idéntica o similar, siempre y cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de producción nacional total de la mercancía idéntica o similar investigada; pero además, el solicitante deberá aportar información de la producción nacional total en la medida que las cifras estén razonablemente disponibles. La solicitante podrá incluso realizar una estimación confiable y describir la metodología correspondiente para la obtención de las cifras relativas a la producción nacional total considerada (arts. 5.4 del AAD, 60 y 63 del RLCE).

Para la presentación de la solicitud de investigación, la Secretaría de Economía (SE), a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), cuenta con formularios¹⁰ en los cuales se solicita la información pertinente para efecto de conocer, entre otros puntos, la identidad del (o de los) solicitante(s), el producto idéntico o similar, el o los países de donde proviene la mercancía importada, una lista de las personas que realizan las importaciones, información sobre los precios, datos sobre la evolución del volumen de las importaciones y, en general, toda la información, argumentos y pruebas sobre la existencia del *dumping*, del daño a la industria nacional en cualquiera de sus tipos y la relación causal entre ambos elementos (trinomio).

Para el llenado del formulario, el solicitante de la investigación puede solicitar una reunión previa a la UPCI para aclarar diversos aspectos sobre si la información y documentación que desea incluirse cumple con el estándar mínimo requerido por la legislación de la materia para acreditar la existencia del trinomio multicitado (art. 5.3 del AAD). Es decir, no es suficiente una simple afirmación no apoyada en las pruebas pertinentes; de ahí la importancia de proporcionar toda la información y documentación disponible y razonablemente al alcance del solicitante de la investigación (art. 5.2 del AAD), es decir, nadie está obligado a lo imposible y habrá información pública disponible y otra que por su naturaleza será confidencial, propia de las empresas importadoras y exportadoras, la cual dichas empresas deberán proporcionar, si así lo consideran conveniente, cuando comparezcan en el procedimiento de investigación, para efecto de defender sus intereses frente a las alegaciones de la solicitante.



Additionally, when all of the domestic producers are related to the exporters or importers, or are themselves importers, the domestic industry may refer to the set of manufacturers of the goods produced in the previous stage of the same continuous line of production (art. 40 of the Foreign Trade Law -LCE-).⁹

The legislation also allows that the petitioners of the antidumping investigation may only represent at least 25% of the national production of the identical or similar merchandise, as long as it is supported by national producers whose joint production represents more than 50% of the total national production of the identical or similar merchandise under investigation; but in addition, the petitioner must provide information of the total national production, to the extent that the figures are reasonably available. The applicant may even make a reliable estimate and describe the corresponding methodology to obtain the figures related to the total national production considered (articles 5.4 of the ADA, 60 and 63 of the RLCE).

In order to file the request for investigation, the Secretariat of Economy (SE), through the International Trade Practices Unit (UPCI), has forms¹⁰ in which it requests the pertinent information in order to know, among other things, the identity of the applicant(s), the identical or similar product, the country(ies) where the imported merchandise comes from, a list of the persons making the imports, information on

prices, data on the evolution of the volume of imports and, in general, all the information, arguments and evidence on the imports, the country or countries from which the imported merchandise originates, a list of the persons making the imports, information on prices, data on the evolution of the volume of imports and, in general, all the information, arguments and evidence on the existence of dumping, injury to the national industry in any of its types and the causal relationship between both elements (trinomial).

In order to fill out the form, the applicant of the investigation may request a previous meeting with the UPCI, to clarify several aspects as to whether the information and documentation to be included, complies with the minimum standard required by the legislation of the matter, to prove the existence of the trinomial mentioned (art. 5.3 of the ADA). That is to say, a simple assertion not supported by the pertinent evidence is not enough; hence the importance of providing all the information and documentation available and reasonably within the reach of the applicant of the investigation (art. 5.2 of the ADA), that is to say, nobody is obliged to the impossible and there will be public information available and other information that by its nature will be confidential, proper of the importing and exporting companies, which said companies must provide, if they consider it convenient, when they appear in the investigation procedure, for the purpose of defending their interests against the allegations of the applicant.

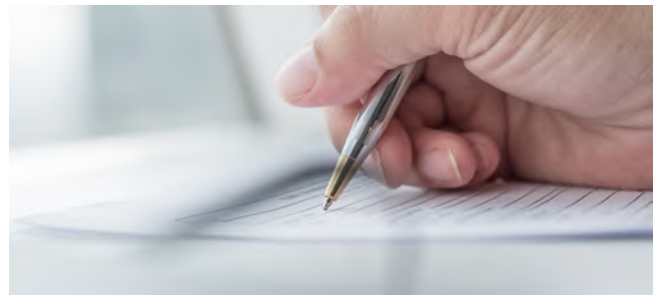
La información contenida en el formulario podrá ser clasificada como información pública, confidencial o comercial reservada. Por información confidencial podrá considerarse:

- I) Los procesos de producción de la mercancía.
- II) Los costos de producción y la identidad de los componentes.
- III) Los costos de distribución.
- IV) Los términos y condiciones de venta, excepto los ofrecidos al público.
- V) Los precios de ventas por transacción y por producto.
- VI) El nombre de los clientes, distribuidores y proveedores.
- VII) Los montos de los ajustes por concepto de términos y condiciones de venta, cantidades, costos variables y cargas impositivas.
- VIII) Cualquier otra información cuya revelación o difusión al público pueda causar daño a la posición competitiva del solicitante de la investigación o de la empresa que presenta la información, o inclusive, cuya divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor, o tendría un efecto significativamente desfavorable para quien proporciona la información (arts. 16.5 del AAD y 49 RLCE).

La información comercial reservada se refiere, entre otros conceptos, a fórmulas secretas o procesos que tengan un valor comercial, no patentado y de conocimiento exclusivo de un reducido grupo de personas que los utilizan en la producción de una mercancía y cuya divulgación podría resultar en un daño patrimonial o financiero sustancial e irreversible para el solicitante de la investigación, o para aquella empresa que presente dicha información (art. 150 del RLCE).

El artículo 151 del RLCE también señala que los nombres de las personas físicas o morales de quien la parte interesada obtuvo información relevante serán del conocimiento exclusivo de la SE y sólo podrán ser difundidos previo consentimiento de dichas personas.

En ambos casos, ya sea información confidencial o comercial reservada, la solicitante de la investigación debe asignar tal carácter a la información que presenta ante la autoridad, a través de un sello elaborado para tal efecto y claramente visible colocado en cada una de las hojas, además de justificar el motivo por el cual le asigna tal carácter a la información y solicitando se evite su divulgación, pero autorizando su revisión a las personas que cumplen con los requisitos exigidos por la legislación de la materia y previa autorización de la autoridad investigadora.



The information contained in the form may be classified as public, confidential or reserved commercial information. Confidential information may be considered as:

- I) The production processes of the goods.
- II) The production costs and the identity of the components.
- III) Distribution costs.
- IV) The terms and conditions of sale, except those offered to the public.
- V) Sales prices per transaction and per product.
- VI) The names of customers, distributors and suppliers.
- VII) The amounts of adjustments for terms and conditions of sale, quantities, variable costs and tax charges.
- VIII) Any other information whose disclosure or dissemination to the public could cause injury to the competitive position of the applicant of the investigation or of the company submitting the information, or even whose disclosure would imply a significant advantage to a competitor, or would have a significantly unfavorable effect to the party providing the information (arts. 16.5 of the ADA and 49 RLCE).

The reserved commercial information refers, among other concepts, to secret formulas or processes that have a commercial value, not patented and of exclusive knowledge of a reduced group of persons that use them in the production of a merchandise and whose disclosure could result in a substantial and irreversible patrimonial or financial damage for the petitioner of the investigation, or for that company that presents such information (Article 150 of the RLCE).

Article 151 of the RLCE also states that the names of the individuals or legal entities from whom the interested party obtained relevant information shall be of the exclusive knowledge of the SE, and may only be disclosed with the prior consent of such persons.

In both cases, whether confidential or reserved commercial information, the applicant of the investigation must assign such character to the information submitted to the authority, through a seal prepared for such purpose and clearly visible placed in each of the sheets, in addition to justifying the reason for which it assigns such character to the information and requesting to avoid its disclosure, but authorizing its review to the persons that comply with the requirements demanded by the legislation of the matter and prior authorization of the investigating authority.

Todo ello, para efectos de que la SE trate dicha información como tal, donde las descripciones proporcionadas en los párrafos anteriores serán de utilidad. En ocasiones la UPCI podrá formular los requerimientos, aclaraciones o reclasificación de la información que considere, no cumple con los criterios establecidos en los artículos 149 y 150 del RLCE.

Cuando la solicitante de la investigación, o cualquier parte interesada en el procedimiento, presente información a la cual debe otorgársele el carácter de confidencial o de comercial reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 6.5.1 del AAD, 153 y 158 del RLCE, esa parte deberá presentar a la UPCI un resumen público de ésta, el cual deberá ser lo suficientemente detallado, a efecto de facilitar a quien la consulte, una comprensión razonable e integral del contenido de la información clasificada como confidencial o comercial reservada. Inclusive, el AAD en el numeral señalado prevé la posibilidad de, en circunstancias excepcionales, la solicitante o parte interesada señale que la información no puede ser resumida, en cuyo caso también deberá expresar las razones por las cuales no es posible resumirla, y quedará en manos de la autoridad la procedencia o no de dicha justificación. En el extremo de que la autoridad exija a la parte interesada la reclasificación de la información, para efectos de otorgarle el carácter de información pública, a fin de que las demás partes la conozcan; o bien, si la parte interesada se rehúsa a la reclasificación, la autoridad podrá no tomar en cuenta dicha información (art. 6.5.2 del AAD).

Adicionalmente, existe un procedimiento de acceso a la información confidencial para aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el RLCE y el formato aludido, entre los cuales se encuentra:

- I) Presentar la solicitud por escrito en la cual manifieste la necesidad de revisar la información.
- II) Presentar los documentos con los cuales acredite su representación, incluido el testimonio de la persona que cuenta con las facultades suficientes para otorgarle la representación.
- III) Ser residente en México; no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso; gozar de buena reputación personal y profesional; no haber sido socio o haber ocupado cargo directivo o haber sido asalariado de la empresa que representa.
- IV) Asumir y presentar el compromiso de confidencialidad.
- V) Manifestar por escrito las razones por las cuales la revisión de la información confidencial es relevante para la defensa de su caso.
- VI) El compromiso de devolver a la SE las versiones originales de sus notas o resúmenes derivados de la revisión de la información confidencial, dentro de los 10 días siguientes de dictada la resolución final de la investigación.
- VII) El pago de una fianza.



All of the above, for the purpose of the SE treating such information as such, where the descriptions provided in the preceding paragraphs will be useful. Occasionally the UPCI may formulate the requirements, clarifications or reclassification of the information that it considers does not comply with the criteria established in articles 149 and 150 of the RLCE.

When the petitioner of the investigation, or any interested party in the procedure, submits information that should be considered confidential or commercially reserved, in accordance with the provisions of articles 6.5.1 of the ADA, 153 and 158 of the RLCE, such party shall submit to the UPCI a public summary of such information, which shall be sufficiently detailed, in order to facilitate to whoever consults it, a reasonable and integral understanding of the content of the information classified as confidential or commercially reserved. Inclusive, the ADA in the aforementioned paragraph provides for the possibility that, in exceptional circumstances, the applicant or interested party may indicate that the information cannot be summarized, in which case it must also express the reasons why it is not possible to summarize it, and it will be up to the authority to decide whether or not such justification is appropriate. In the event that the authority requires the interested party to reclassify the information, for purposes of granting it the character of public information, so that the other parties may know it; or, if the interested party refuses to reclassify it, the authority may disregard such information (art. 6.5.2 of the ADA).

In addition, there is a procedure for access to confidential information for those persons who comply with the requirements established in the RLCE and the aforementioned form, among which are the following:

- I) Submit a written request stating the need to review the information.
- II) Present the documents with which he/she accredits his/her representation, including the testimony of the person who has sufficient powers to grant the representation.
- III) Be a resident in Mexico; not have been convicted by an enforceable judgment for an intentional crime; have a good personal and professional reputation; not have been a partner or have held a managerial position or have been a salaried employee of the company he/she represents.
- IV) To assume and present the confidentiality commitment.
- V) State in writing the reasons why the review of the confidential information is relevant to the defense of their case.
- VI) The commitment to return to the SE the original versions of its notes or summaries derived from the review of the confidential information, within 10 days after the final resolution of the investigation has been issued.
- VII) The payment of a bond.

Al respecto, si la UPCI considera que se cumplieron los requisitos aludidos, otorgará la autorización correspondiente (arts. 80 de la LCE y 160 último párrafo del RLCE) y la revisión de la información confidencial deberá realizarse en las instalaciones de la SE y en presencia de un funcionario de la UPCI (arts. 159 y 160 del RLCE).

Es de observarse, cualquier persona podrá tener acceso a la información pública contenida en el expediente de la investigación *antidumping*, una vez que hayan transcurrido 60 días hábiles de publicada la resolución final, por medio de la cual se da por terminada la investigación (arts. 3 último párrafo, 80 de la LCE y 156 del RLCE).

In this regard, if the UPCI considers that the aforementioned requirements were met, it will grant the corresponding authorization (articles 80 of the LCE and 160 last paragraph of the RLCE) and the review of the confidential information must be carried out at the facilities of the Ministry of Commerce and in the presence of an official of the UPCI (articles 159 and 160 of the RLCE).

It should be noted that any person may have access to the public information contained in the file of the anti-dumping investigation, once 60 working days have elapsed since the publication of the final resolution, by means of which the investigation is terminated (articles 3 last paragraph, 80 of the LCE and 156 of the RLCE).



Fuentes

1. El Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en su redacción también prevé la posibilidad de que un Estado Miembro pueda imponer derechos compensatorios, es decir, aquellos que deriven de una investigación por subvenciones, pero claramente indica en el párrafo 5 de dicho Artículo: ninguna mercancía podrá ser objeto simultáneamente de derechos *antidumping* y derechos compensatorios para remediar el *dumping* o las subvenciones a la exportación. *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* (GATT de 1947), ahora de 1994, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm, consultado el 19 de marzo de 2021.
2. Obsérvese que el pago por concepto de cuotas compensatorias es independiente del pago que deba realizarse por conceptos como impuesto general de importación (IGI), impuesto al valor agregado (IVA) y derecho de trámite aduanero (DTA).
3. Entre otros, véanse los artículos 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.9, 6.11 del AAD, 49, 53, 81, 82 y 88 de la Ley de Comercio Exterior (LCE) y 75 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).
4. *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm, consultado el 19 de marzo de 2021. Recordemos también que la legislación de la materia se integra por el GATT (artículo VI), la LCE, el RLCE y, en su caso, los acuerdos y tratados comerciales suscritos por México.
5. El Acuerdo *Antidumping* comprende 18 artículos, divididos en tres Partes, además de dos Anexos. En la Parte I los primeros 12 artículos están referidos a las investigaciones *antidumping*, entre los cuales se encuentran: la presentación de pruebas (art. 6), el compromiso de precios (art. 8), sobre la percepción retroactiva de los derechos *antidumping* (art. 10), la duración de los derechos, su revisión anual y quinquenal (art. 11), la revisión judicial (art. 13), las investigaciones en favor de un tercer país (art. 14), el trato especial a los países en desarrollo miembros (PMA) (art. 15). La Parte II referente al Comité de Prácticas *Antidumping* (art. 16), las consultas y solución de diferencias (art. 17); y la Parte III a las disposiciones finales (art. 18).
6. *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* (GATT de 1947), ahora de 1994, Ob. Cit.
7. *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, Ob. cit.
8. *Reglamento de la Ley de Comercio Exterior*, publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 1993, última reforma del 22 de mayo de 2014, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31686/Reg_LComExt.pdf, consultado el 19 de marzo de 2021.
9. *Ley de Comercio Exterior*, publicada en el DOF el 27 de julio de 1993, última reforma del 21 de diciembre de 2006, <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo3868.html>, consultada el 21 de marzo de 2021.
10. El Formulario Oficial de solicitantes de investigación por discriminación de precios está disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426638/Antidumping_Solicitantes.pdf, consultado el 21 de marzo de 2021.

Sources

1. Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) itself also provides for the possibility that a Member State may impose countervailing duties, i.e., those resulting from a subsidy investigation, but clearly states in paragraph 5 of that Article: no goods shall be subject to both anti-dumping and countervailing duties to remedy dumping or export subsidies. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), now 1994, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, Accessed on March 19, 2021.
2. It should be noted that the payment of antidumping duties is independent of the payment to be made for items such as general import tax (IGI), value added tax (VAT) and customs processing fee (DTA).
3. Among others, see Articles 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.6, 6.9, 6.11 of the ADA, 49, 53, 81, 82 and 88 of the Foreign Trade Law (LCE) and 75 of the Regulations of the Foreign Trade Law (RLCE).
4. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm, accessed on March 19, 2021. The legislation on this matter is made up of the GATT (Article VI), the LCE, the RLCE and, as the case may be, the trade agreements and treaties signed by Mexico.
5. The Antidumping Agreement comprises 18 articles, divided into three Parts, in addition to two Annexes. In Part I, the first 12 articles refer to antidumping investigations, among which are: the presentation of evidence (Art. 6), price undertakings (Art. 8), retroactive collection of antidumping duties (Art. 10), the duration of duties, annual and five-year reviews (Art. 11), judicial review (Art. 13), investigations in favor of a third country (Art. 14), special treatment for developing country members (Art. 15). Part II on the Committee on Antidumping Practices (art. 16), consultations and dispute settlement (art. 17); and Part III on final provisions (art. 18).
6. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), now 1994, Ob. cit.
7. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, Ob. cit.
8. Regulations of the Foreign Trade Law, published in the Official Journal of the Federation (DOF) on December 30, 1993, last amended on May 22, 2014, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31686/Reg_LComExt.pdf, accessed March 19, 2021.
9. Foreign Trade Law, published in the DOF on July 27, 1993, last amended on December 21, 2006, <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo3868.html>, accessed March 21, 2021.
10. The Official Form for Applicants for Price Discrimination Investigation is available at https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426638/Antidumping_Solicitantes.pdf, accessed March 21, 2021.

